

## PROPOSICIÓN

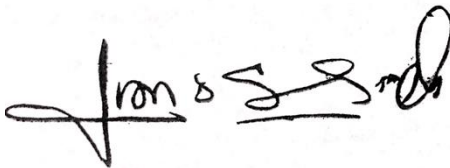
Modifíquese el artículo 12 del Proyecto de Ley No. 005 de 2019S /010 2019C . El cual quedara así:

TEXTO ORIGINAL	TEXTO PROPUESTO
<p><b>ARTÍCULO 12.</b> Modifíquese el artículo 325 en la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:</p> <p><b>“ARTÍCULO 325. OMISIÓN DE CONTROL.</b> El miembro de junta directiva, representante legal, administrador o empleado de una institución financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito, oficial de cumplimiento, jefe de control interno, de cualquier entidad obligada a implementar sistemas de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, o a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Información de Análisis Financiero (UIAF), que, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, la transferencia, manejo o aprovechamiento, o la inversión de dinero para la comisión de actividades delictivas, omite el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro meses (144) y multa de ciento treinta y tres punto tres</p>	<p><b>“ARTÍCULO 325. OMISIÓN DE CONTROL.</b> El miembro de junta directiva, representante legal, administrador <del>e</del> <u>empleado</u> de una institución financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito, oficial de cumplimiento, jefe de control interno de cualquier entidad obligada a implementar sistemas de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, o a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Información de Análisis Financiero (UIAF), que, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, la transferencia, manejo o aprovechamiento, o la inversión de dinero para la comisión de actividades delictivas, omite el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro meses (144) y multa de ciento treinta y tres punto tres</p>

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

H.R JUAN CARLOS WILLS OSPINA  
Capitolio Nacional – Primer piso.  
Bogotá, Colombia.

<p><i>(133.3) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”</i></p>	<p><i>(133.3) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”</i></p>
<p>se elimina la expresión “ o empleado” considerando que por su nivel de decisión y funcionalidad dentro de la entidad no implica función alguna de control o vigilancia sobre las operaciones, razón por la cual el tipo penal debe estar circunscrito a quienes ejerzan cargos con funcionalidad de control sobre las operaciones, como ocurre con el jefe de control interno o el oficial de cumplimiento.</p> <p><u>El texto propuesto sigue conteniendo la expresión “o empleado” que se encuentra al principio del artículo.</u></p>	



**JUAN CARLOS WILLS OSPINA**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA POR BOGOTÀ.**

**AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA**

H.R JUAN CARLOS WILLS OSPINA  
Capitolio Nacional – Primer piso.  
Bogotá, Colombia.

## PROPOSICIÓN

Modifíquese el párrafo del artículo 35 del Proyecto de Ley No. 005 de 2019S /010 2019C. El cual quedara así:

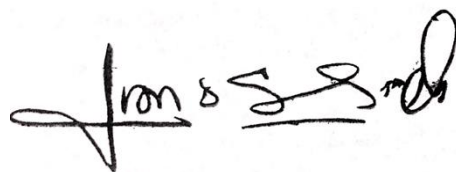
TEXTO ORIGINAL	TEXTO PROPUESTO
<p><b>PARÁGRAFO.</b> <i>En caso de que al indiciado se le hubiese impuesto alguna pena sustitutiva como consecuencia de dar a conocer el paradero de ciertos recursos y posteriormente se acredite que la persona conocía del destino de otros recursos y hubiese manifestado desconocerlo o haya suministrado información falsa, se reactivará la pena principal, perdiendo así las rebajas punitivas y los subrogados a los que se haya hecho beneficiario.</i></p> <p><i>Para adelantar el trámite de reactivación de la pena principal, la Fiscalía General de la Nación remitirá comunicación escrita al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en la que se acredite tal situación para que adopte las decisiones correspondientes en los términos previstos en el artículo 7A de la Ley 65 de 1993.</i></p>	<p><b>PARÁGRAFO.</b> <i>En caso de que al <u>CONDENADO</u> se le hubiese impuesto alguna pena sustitutiva como consecuencia de dar a conocer el paradero de ciertos recursos y posteriormente se acredite que la persona conocía del destino de otros recursos y hubiese manifestado desconocerlo o haya suministrado información falsa, se reactivará la pena principal, perdiendo así las rebajas punitivas y los subrogados a los que se haya hecho beneficiario.</i></p> <p><i>Para adelantar el trámite de reactivación de la pena principal, la Fiscalía General de la Nación remitirá comunicación escrita al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en la que se acredite tal situación para que adopte las decisiones correspondientes en los términos previstos en el artículo 7A de la Ley 65 de 1993.</i></p>
<p>Se le impone pena al condenado, no al indiciado toda vez que El indiciado es aquella persona objeto de un despliegue de</p>	

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

H.R JUAN CARLOS WILLS OSPINA  
Capitolio Nacional – Primer piso.  
Bogotá, Colombia.

diligencias de averiguación por parte de la Policía Judicial, pero que no ha sido notificada de su calidad de imputada, es decir, que no ha asistido a una audiencia de formulación de imputación y que tampoco ha sido vencida en juicio.

Se propone cambiar la palabra indiciado por condenado.



**JUAN CARLOS WILLS OSPINA**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA POR BOGOTÀ.**

## PROPOSICIÓN

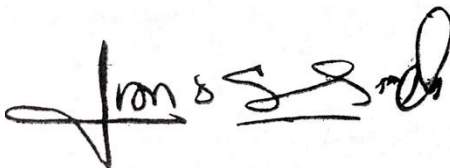
Modifíquese el artículo 36 del Proyecto de Ley No. 005 de 2019S /010 2019C . El cual quedara así:

TEXTO ORIGINAL	TEXTO PROPUESTO
<p><b>ARTÍCULO 36.</b> Modifíquese el artículo 410 de la Ley 906 de 2004, el cual quedaría así:</p> <p><b>“ARTÍCULO 410. OBLIGATORIEDAD DEL SERVICIO DE PERITOS.</b> <i>El Fiscal General de la Nación o sus delegados, o la defensa pública, podrán solicitar a las entidades públicas o privadas, la designación de expertos en determinada ciencia, arte o técnica, cuando quiera que la naturaleza de las conductas punibles que se investigan requiera de la ilustración de tales expertos.</i></p> <p><i>El director de la entidad o dependencia pública o privada realizará la designación dentro de los diez (10) días siguientes al recibo del requerimiento. La designación como perito será de forzosa aceptación y solo podrá excusarse por enfermedad grave, por configurarse alguna de las causales de impedimento previstas en el artículo 56 de este Código, haber sido designado como perito en otra actuación en curso, o cuando exista una razón que, a</i></p>	<p><b>ARTÍCULO 36.</b> Modifíquese el artículo 410 de la Ley 906 de 2004, el cual quedaría así:</p> <p><b>“ARTÍCULO 410. OBLIGATORIEDAD DEL SERVICIO DE PERITOS.</b> <i>El Fiscal General de la Nación o sus delegados, o la defensa <u>PÚBLICA</u>, podrán solicitar a las entidades públicas o privadas, la designación de expertos en determinada ciencia, arte o técnica, cuando quiera que la naturaleza de las conductas punibles que se investigan requiera de la ilustración de tales expertos.</i></p> <p><i>El director de la entidad o dependencia pública o privada realizará la designación dentro de los diez (10) días siguientes al recibo del requerimiento. La designación como perito será de forzosa aceptación y solo podrá excusarse por enfermedad grave, por configurarse alguna de las causales de impedimento previstas en el artículo 56 de este Código, haber sido designado como perito en otra actuación en curso, o cuando exista una razón que, a</i></p>

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

H.R JUAN CARLOS WILLS OSPINA  
Capitolio Nacional – Primer piso.  
Bogotá, Colombia.

<p><i>juicio del fiscal del caso, pueda incidir negativamente en la investigación.</i></p> <p><i>El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consagradas en este parágrafo o del deber de comparecer al juicio oral dará lugar a falta disciplinaria gravísima en el caso de los servidores públicos o la imposición de multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para los particulares.”</i></p>	<p><i>juicio del fiscal del caso, pueda incidir negativamente en la investigación.</i></p> <p><i>El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consagradas en este parágrafo o del deber de comparecer al juicio oral dará lugar a falta disciplinaria gravísima en el caso de los servidores públicos o la imposición de multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para los particulares.”</i></p>
<p>El artículo propuesto para debate excluye a la defensa privada de esta garantía constitucional consagrada en el artículo 29 Superior:</p> <p><i>(...) Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso(...)</i></p> <p>Se propone Eliminar la palabra “<u>publica</u>” que sigue en el inciso 1º.</p>	



**JUAN CARLOS WILLS OSPINA**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA POR BOGOTÀ.**

**AQUÍVIVE LA DEMOCRACIA**

H.R JUAN CARLOS WILLS OSPINA  
Capitolio Nacional – Primer piso.  
Bogotá, Colombia.